

to el informe del juez 2º de letras con los documentos justificativos que acompañan; lo pedido por el Promotor fiscal; lo alegado por el promovente y la sentencia del juez 3º suplente de Distrito, en la que haciendo la debida especificacion de las costas propiamente judiciales, expresadas en la cuenta á que se ha referido el quejoso, apoyado en el art. 17 y 101 de la Constitución de la República, concede el amparo respecto de pago de tales costas. Por los fundamentos del juez, se resuelve lo siguiente; Es de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció en la citada ciudad de Querétaro, á 28 de Octubre próximo pasado, declarando que la Justicia Federal ampara y protege á D. Hermenegildo Feliú, representado por D. Ramon O. Feliú, contra los actos y providencias dictadas por el O. juez 2º de letras de esa ciudad, por las cuales se les cobran las costas judiciales que dicho juez de Distrito menciona.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 6 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el O. Perfecto Hernandez Flores contra una resolución del gobierno del Estado, por violacion de garantías.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

O. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que el O. Perfecto Hernandez Flores interpuso el recurso de amparo fundado en las garantías individuales consignadas en los artículos 18, 19 y 20 de la Constitución Federal, contra la orden de prision dictada por el O. Gobernador del Estado, en virtud de la cual permanece preso en la Penitenciaría de Salamanca, despues de promulgada la ley de amnistía dada en 27 de Julio próximo pasado en la que se cree comprendido.

El C. Gobernador mandó aprehender á varios individuos entre los cuales se hallaba el quejoso que intentaban en la ciudad de Leon perturbar el orden público y habiendo dado cuenta al Ejecutivo de la Union, segun la nota del Ministerio de la Guerra de 25 de Julio último y haciendo uso de las facultades extraordinarias concedidas en la ley de 17 de Marzo del presente, el C. presidente dispuso que Perfecto Hernandez Flores fuera juzgado por el delito de desercion con la circunstancia agravante de haberse pasado al enemigo.

Perfecto Hernandez Flores dice en su escrito de queja que siendo capitán de la 2ª compañía del 2º batallón de guardia nacional de San Luis Potosí y habiéndose rebelado su compañía, se incorporó á las filas de los sublevados, con el objeto de procurar que volviera á estar á las órdenes del Supremo Gobierno y no habiéndolo logrado se separó de ellos retirándose á vivir pacíficamente en Leon donde fué aprehendido y reducido á prision el 11 de Junio de este año. Publicada en tros del presente la ley de amnistía concedida por el C. presidente cons

titucional interino de la Republica, fueron puestos en libertad los aprehendidos en León, exceptuando al quejoso, porque el delito de que es responsable, segun se dice en el primer informe rendido por el C. Gobernador, no es de un carácter político que pueda comprenderse en esta ley sino un delito grave del Orden militar y cuyo conocimiento no pertenece á las autoridades militares del Estado por haberse cometido al servicio de la federacion.

Continuando preso Perfecto Hernandez Flores á pesar de la amnistia interpuso el recurso de amparo solicitando la suspension del acto que reclamaba y el Juzgado, de conformidad con el Promotor Fiscal, decretó la suspension mandando que fuera puesto en libertad bajo de fianza de persona abonada. El C. Gobernador contestó en 22 del presente, al oficio en que se le hizo saber esta determinacion, que por el correo del dia siguiente libraria la Orden al C. Gefe político de Salamanca para que verificara la libertad bajo de fianza que se había decretado, ignorándose hasta esta fecha si el quejoso está libre ó aun permanece preso.

Pedido el informe de que habla el art. 2 de la ley de 20 de Enero de 1869, la autoridad ejecutora en este juicio, manifestó que no tenia que añadir al informe que había emitido con fecha 11 del actual, en que se transcribió la nota del Ministerio de la Guerra de que se ha hablado agregando, autorizada por el C. secretario del gobierno, la copia de otra resolution del mismo ministerio comunicada por el telégrafo en la que se aconseja que se informe al Juzgado de Distrito que Perfecto Hernandez Flores está preso por un delito grave del Orden militar y no por un delito político, que si le pone en libertad bajo de fianza puede quedar ilusoria la accion de la justicia y por último que si el C. juez de Distrito insis-

te en esta providencia y se fuga el reo el gobierno promoverá la responsabilidad consiguiente.

El Promotor Fiscal tiene, cumpliendo con el art. 9 de la ley citada que dar un parecer sobre el punto principal del juicio, sobre la violacion de las garantías individuales que se han invocado.

La que se otorga en la primera parte del art. 19 de la Constitucion consiste en que ninguna detencion podrá exceder del término de tres dias sin que se justifique con el auto motivado de prision y los demas requisitos que establece la ley. El C. Perfecto Hernandez Flores ha estado detenido mas tiempo del que se establece en este artículo y no ha habido auto de formal prision ni los demas requisitos de que habla la Constitucion.

El C. Gobernador del Estado al ordenar la aprehension del quejoso, hizo uso de las facultades que el Ejecutivo de la Union concedió á los gobernadores de los Estados en la circular á que se acompaña la ley de 17 de Mayo último, que puso en vigor la de 2 de Diciembre de 1871 en la que ademas de suspenderse algunas garantías individuales para los rebeldes se le facultó para dictar las medidas que fueran necesarias en materia de hacienda y guerra.

En esta circular se previno á dichos funcionarios que para que fuera eficaz la accion del Ejecutivo Federal y supuesto que solo él podria hacer uso de las facultades concedidas, cuidaran en su Estado de aprehender á las personas que les constase que maquinaban ó fomentaban la rebelion de cualquiera manera, dando cuenta inmediatamente, para que el C. Presidente dispusiera sin demora lo que fuera conveniente, segun los casos que se ofrecieran. Obsequiando esta prevencion el C. Gobernador, mandó aprehender á los individuos que en la ciudad de Leon procuraban perturbar el Orden público.

La ley de 17 de Mayo último como se ha dicho, dispuso en su art. 1º que continuaba vigente hasta un mes despues de la próxima reunion del Congreso, la ley de 2 de Diciembre de 1871 que á su vez declaró vigentes algunos artículos de la ley de 1º de Enero del año de 1870 y modificó otros, pero los que tienen relacion con el caso que nos ocupa son, el 8º que modificado por el 1º de dicha ley, establece que desde el momento que un militar empieza á obrar con las armas en la mano rebelándose contra las autoridades constituidas, comete un delito que deja de ser meramente político y entra en la esfera de comun, el 2º que dice: que los militares en servicio activo de sarjento arriba que se pasasen al enemigo serán juzgados con arreglo á los procedimientos del art. 1º de la ley de 17 de Enero de 1870, y el 4º que dispone que la suspension de la garantía que otorga la primera parte del art. 19 de la Constitucion se refiere únicamente á los acusados de delito de rebelion á las autoridades constituidas.

El Ejecutivo de la Union al mandar que Perfecto Hernandez Flores fuera juzgado militarmente y no tomar ninguna providencia para que su detencion no se prolongara mas allá del término de tres dias, lo consideró comprendido en los artículos 2º y 4º citados, es decir como acusado de rebelion supuesto que segun el art. 4º solo para esta clase de reos está suspensa la garantía consignada en la primera parte del art. 19 de la Constitucion.

Dada la ley de amnistía de 29 de Julio último, el delito cometido por el quejoso segun lo ha considerado el Ejecutivo de la Union, debe concluirse que está comprendido en el art. 1º de la dicha ley que concede amnistía por los delitos políticos sin excepcion de persona alguna.

Los autores que tratan de los delitos políticos y el Código, pena para los deli-

tos federales en el que se han seguido las mejores doctrinas sobre este punto, llaman delitos políticos todos aquellos que afectan la seguridad exterior ó interior de una nacion y dicho Código en su art. 1095 y la ley de 6 de Diciembre de 1856 refieren entre ellos el acto de rebelarse con el objeto de separar de su cargo al Presidente de la República. Cuando en la rebelion interviene alguna circunstancia que la constituya en delito militar los culpables serán castigados segun las leyes militares pero el delito conserva su misma naturaleza.

En la ley de 27 de Julio próximo pasado, se concede amnistía por los delitos políticos sin hacer distincion de los que por algunas circunstancias sean ademas de políticos del orden militar. El art. 4º de la misma ley declara que los amnistiados no tienen derecho á la devolucion de sus grados, palabra que no puede referirse mas que á los militares, sin exceptuar á los que se hayan desertado al frente del enemigo. En el 5º se establece sin hacerse ninguna distincion que los rebeldes que se encuentren con las armas en la mano, y algunos estarán en el mismo caso que el quejoso, gozarán de la amnistía presentándose dentro del plazo que en la misma ley se fija á los gobernadores ó gefes políticos respectivos, y por último la misma excepcion que se hace en el art. 6º en la que no está comprendido Perfecto Hernandez Flores, es que no gozan de la amnistía los que por haber sido lugartenientes del llamado imperio ó generales en jefe que mandando divisiones ó cuerpos de ejército se pasaron al invasor están sujetos á lo prevenido en los arts. 2 y 4 de la ley de 14 de Octubre de 1870.

Si el delito cometido por el quejoso á pesar de lo expuesto no se considera como político del orden militar y comprendido en la ley de amnistía, sino como comun, siguiendo la clasificacion que hace la ley de 2 de Diciembre de 1871, no es-

tá suspensa la garantía individual del art. 19 de la Constitución para los acusados de delitos comunes porque en el art. 14 de la misma se dice que solamente lo está para los acusados de rebelion, acto que no puede negarse que constituya un delito político.

El art. 10 de la ley de 17 de Enero de 1870 en ninguna de sus fracciones autoriza que el militar sujeto á ser juzgado conforme á él, pudo estar detenido por un tiempo indefinido sin observar el precepto constitucional.

El C. Ministro de la Guerra en el telégrama que en copia se acompañó al informe con justificacion, dice que Perfecto Hernandez Flores no está comprendido en la ley de amnistía porque es responsable de un delito grave del orden militar pero como se ha dicho anteriormente puede llamarse sin embargo de ser militar político y respecto de las razones que en él se exponen para que el Juzgado no lleve adelante el auto de suspension deben tenerse presente los arts. 3º, 5º y 6º de la ley orgánica de 29 de Enero de 1869 que le han servido de fundamento y justificado el procedimiento del Juzgado en la ley, el temor de que por la fuga del reo quedo sin aplicacion la accion de la justicia, no es bastante para que deje de obedecer dicha suspension porque el auto en que se determina no tiene mas recurso que el de responsabilidad en la que no ha incurrido el Juzgado porque si este temor fuera suficiente para no aplicar la ley, las garantías individuales que otorga la Constitución y que muchas veces pueden violarse en las personas de criminales, serian ilusorias.

Respecto de las garantías consignadas en los arts. 18 y 20 de la Constitución que tambien se han invocado por el quejoso, su violacion no aparece demostrada, supuesto que de los informes rendidos por el C. Gobernador del Esta-

do consta que no ha sido juzgado sino únicamente detenido para que lo fuera segun el art. 10 de la ley de 17 de Enero de 1870.

Por las razones expuestas y considerando violada en la persona de Perfecto Hernandez Flores la garantía otorgada en la 1ª parte del art. 19 de la Constitución, el Promotor fiscal pide al Juzgado se sirva conceder el amparo de la Union que se solicita en el presente juicio.

Guanajuato, Agosto 31 de 1872.—  
*José Aguilar y Córdova.*

#### OTRO PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por el C. Perfecto Hernandez Flores, supuesto su estado que es el de alegar de buena prueba, dice: que en el término probatorio, el actor solicitó se librara exhorto al ciudadano juez de letras de Salamanca, con el objeto de hacer constar en las actuaciones, segun las partidas que obran en los libros de las entradas y salidas de presos en la alcaidía de la Penitenciaría de Salamanca, la fecha del día en que fué reducido á prision y la del día en que salió en libertad bajo de fianza. Al cumplimentarse este exhorto, el C. Santiago Sanchez, alcaide de dicha Penitenciaría, presentó los libros, para que fué requerido, dando fe el ciudadano juez de letras de Salamanca, que el día 19 de Julio del presente, entró preso el C. Perfecto Hernandez Flores y salió libre bajo de fianza, el día 25 de Agosto último.

El alcaide manifestó que no podia exhibir la copia del auto de formal prision, porque no se le habia entregado ninguna, que únicamente habia recibido

un oficio del O. Gefe político de Salamanca en el que se le decia, que por orden superior el quejoso quedaba preso. A solicitud tambien del actor, se examinaron como testigos en el mineral de Catorce, en el Estado de San Luis Potosí, y segun el interrogatorio previamente presentado los CC. Francisco Duque, Jesus Acosta, Ruperto Acosta y Luis Tolentino, y por sus declaraciones consta, que el O. Perfecto Hernandez Flores, capitán de una compañía de guardia nacional al servicio de la Federacion, se sublevó dicha compañía, á la que se incorporó el quejoso pocos dias despues, añadiendo los testigos que les consta que procuró hasta con peligro de su vida evitar la sublevacion y que todo el tiempo que permaneció dentro las filas de los sublevados, no cometió ningun otro delito.

Estas pruebas demuestran la verdad de los hechos referidos en el escrito de queja y que no fueron negados por la autoridad ejecutora, segun los cuales dió su parecer el que suscribió respecto de la violacion de las garantías individuales que han sido invocadas, por cuyo motivo, el Promotor fiscal reproduciendo su anterior pedimento, pide al Juzgado se sirva conceder el amparo que se solicita.

Guanajuato, Octubre 22 de 1872.—  
*José Aguilar y Córdoba.*

SENTENCIA del O. juez de Distrito.

Guanajuato, 29 de Octubre de 1872.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el O. Perfecto Hernandez Flores, contra la resolucion que el gobierno del Estado dictó, previa consulta del Ministerio de la Guerra, disponiendo, al ser publicada en el mismo Estado la ley de amnistía de 27 de Ju-

lio próximo pasado, que el quejoso por no estar comprendido en ella, continuase preso en la Penitenciaría de Salamanca en calidad de presunto reo de desercion, con circunstancias agravantes, y á disposicion de mismo Ministerio que se acaba de mencionar, con cuyo procedimiento cree el quejoso violadas en su perjuicio las garantías que consignan los arts. 18, 19 y 20 de la Constitucion política vigente; y resultando que el peticionario se hallaba de guarnicion en el mineral de Catorce en Noviembre de 1871, como capitán de una compañía del segundo batallon de guardia nacional de San Luis Potosí; y habiéndose rebelado contra las autoridades constituidas, la fuerza que mandaba, trató él en vano de hacerla volver á la obediencia debida; por lo que se retiró de la escena tumultuaria producida por los rebeldes y despues de permanecer algunos dias en la enunciada poblacion, determinó marchar á incorporarse en las filas revolucionarias, en las cuales militó por algun tiempo, separándose al fin y dirigiéndose á Leon, en donde fijó su residencia y con fecha 16 de Julio último fué aprehendido con otros individuos, porque se tuvo noticia de que todos ellos maquinaban trastornar el orden público; en cuya virtud, dada cuenta al O. Ministro de la Guerra, tuvo á bien acordar este funcionario que el O. Hernandez Flores quedara á su disposicion, como reo de desercion, con circunstancias agravantes, y sus presuntos cómplices, condenados á un año de prision; y cuando fué promulgada la ley de amnistía, decretó la misma autoridad que estos fueran puestos en libertad y el quejoso permaneciera preso todavía por el delito grave del orden militar que se le atribuia; habiendo sido el O. Gobernador del Estado el ejecutor de esta providencia. Resultando que el agraviado estuvo en la prision de la Penitenciaría de Salamanca desde 19 de Julio hasta el 25



de Agosto próximo pasado, sin que se le motivara la prision, con cuyo acto se ha violado la garantía á que se refiere el art. 19 del Pacto federal; considerando: que por efecto de la ley de amnistía no debe reputarse ya al quejoso como reo político, y por lo mismo desde la fecha en que esta ley fué publicada en el Estado, disfruta aquel de la citada garantía, la cual únicamente para los sublevados y plagiarios estaba suspensa, conforme al art. 4º de la ley de 2 de Diciembre de 1871, que previene que los que cometan delitos del Orden comun, sin ser sublevados, ni plagiarios, gozarán plenamente de todas las garantías individuales que otorga la Constitucion; considerando: que el delito del Orden militar que se imputa al promovente no autoriza la violacion que en su persona se ha consumado, prolongando su detencion ó prision por mas de tres dias, sin haberla justificado con el auto motivado que corresponde; considerando: que la existencia de delito de desercion no consta probada en manera alguna y antes bien obra en autos una informacion de testigos mayores de toda excepcion que declaren no haber tomado participio alguno el quejoso en la seduccion y defecion de sus subordinados; considerando: que ningun justificante en contrario ha rendido el Ministerio de la Guerra ni el gobierno del Estado y en consecuencia hay que convenir en que no está acreditada la desercion con circunstancias agravantes, á que aluden dichas autoridades, considerando: que en el caso de que este delito haya sido perpetrado por Hernandez Flores, no obstante los datos que ministra el presente juicio, debe ser puesto á disposicion de su juez competente, para que sea juzgado con arreglo á las leyes, y no permanecer en prision indefinida y á disposicion de una autoridad del Orden administrativo; tanto porque para los reos de delitos militares no están suspensas las garantías de la

libertad personal del hombre, como porque ha expirado ya el término de las facultades extraordinarias fijado por la ley de 17 de Mayo del año actual; por tales consideraciones, el ciudadano juez de Distrito, fallando definitivamente, con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Perfecto Hernandez Flores contra la providencia del Ministerio de la Guerra ejecutada por el gobierno del Estado, en virtud de la cual se dispuso que el quejoso continuara en la prision de la Penitenciaría de Salamanca á disposicion del mismo Ministerio, despues de publicada la ley de amnistía y de pasado el término constitucional de la detencion; en el concepto de que esta declaracion no coarta la facultad que el Ministerio de la Guerra tiene para consignar al quejoso á la autoridad judicial competente, por el delito militar de que lo presume reo. Notifíquese este fallo y publíquese, como lo previene la ley, remitiendo los autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales, previa citacion de las partes. Así el ciudadano juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*  
—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 11 de Noviembre de 1872.—*Luis G. Medina.*

#### EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 10 de 1872.—Visto el recurso de amparo que en 9 de Agosto del corriente año, promovió en Guanajuato ante el juez de Distrito del Estado del mismo nombre, Perfecto Hernandez Flores, contra la resolucion que el gobierno del Estado dictó, previa consulta del Ministerio de la Guerra,

disponiendo al ser publicada en el mismo Estado la ley de amnistía de 27 de Julio próximo pasado, que el promoviente por no estar comprendido en ella, continuara preso en la Penitenciaría de Salamanca, en calidad de presunto reo de desercion con circunstancias agravantes, y á disposicion del Ministerio dicho; con cuyo procedimiento afirma Hernandez Flores, que se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 18, 19 y 20 de la Constitucion Federal. Vistas las constancias de autos y atenta la sentencia del juez de Distrito mencionado, en la cual concede el amparo al solicitante, considerando entre otros fundamentos que ha estado en prision en la Penitenciaría de Salamanca, desde 19 de Julio hasta 25 de Agosto de este año, en que por suspension del acto reclamado en este recurso, se puso al quejoso en libertad bajo de fianza, sin que se le haya motivado la prision con el auto correspondiente.

Por este fundamento legal y porque segun las circunstancias del caso, el quejoso está comprendido en los amnistados de la ley referida de 27 de Julio, con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara lo siguiente: Es de confirmarse y se confirma la sentencia que dicho juez pronunció en Guanajuato á 29 de Octubre del corriente año, decidiéndose que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Prefecto Hernandez Flores, contra la providencia del Ministerio de la Guerra, ejecutada por el gobierno del Estado, en virtud de la cual se dispuso que el quejoso continuara en la prision de la Penitenciaría de Salamanca, á disposicion del mismo Ministerio, despues de publicada la ley de amnistía y de pasado el término constitucional de la detencion.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos

Tomo III.—Parte II.

consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*Simón Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José Greña Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 20 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacán por María Juana Medina por su esposo Manuel Ayala contra el C. Prefecto de Morelia, que consignó á Ayala al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

Juana Medina, con el carácter de esposa legítima del C. Manuel Ayala, se presentó ante vd. solicitando amparo de garantías, con motivo de que el C. Prefecto de esta capital consignó al servicio de las armas á aquel, sin haberlo sujetado antes al Jurado de calificacion correspondiente.

La autoridad responsable manifestó en su informe: que, si bien es cierto que no apareció en contra de Ayala la prueba bastante para condenarle como saltador, sí hubo conviccion moral para considerársele como hombre pernicioso; y como tal, dispuso consignarlo al contingente.

Mas para esto, debió el C. Prefecto haber sujetado antes á Ayala al Jurado de calificacion, á que se refiere la ley general de 17 de Mayo del corriente año.